

Claudio Frites Camilla¹
Felipe Vargas Aceituno²

Volver al Valle del Huasco:
cuadrando el círculo de las
políticas públicas.

Resumen

A continuación, se presentan reflexiones sobre las intervenciones del Programa Servicio País realizadas en el Valle del Huasco durante el ciclo 2009. En primer lugar, se describen someramente las características e historia del territorio. Luego, se caracteriza a las comunidades, que son percibidas como vulnerables ante el desempleo y atrasadas en lo productivo, reproduciendo un sistema dependiente y precario en múltiples dimensiones. En tercer lugar, se analiza el rol del profesional Servicio País, inserto en este contexto y cuáles son los principales desafíos que enfrenta. Por último, se ofrecen algunas conclusiones.

El trabajo busca evidenciar las contradicciones que deben enfrentar en el quehacer los profesionales de Servicio País, en un territorio complejo y dinámico, a partir de la implementación de políticas públicas orientadas de manera primaria al fomento productivo y que favorecen espacios de gobernabilidad, en lugar de espacios de autonomía para las comunidades. Surgiendo entonces la pregunta: ¿se busca superar la pobreza, o estandarizar modelos de vida?

Estas ideas se desarrollan a partir de las intervenciones de Servicio País en que participaron los autores durante el ciclo 2009-2010 en el Valle del Huasco, relatando las tensiones que se debieron enfrentar y resolver, frente a los conflictos de las comunidades y organizaciones con las autoridades políticas y técnicas de la provincia.

Palabras Claves: Intervención social, Políticas Públicas, pobreza.

Valle del Huasco, el territorio y sus características

El Valle del Huasco se ubica dentro de la región de Atacama, comprendiendo, de este a oeste, las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. En lo productivo, históricamente este valle ha tenido su vocación en la agricultura y la minería. Sin embargo, no se trata de fenómenos comparables en el tiempo, dado su impacto, dimensión y escala, puesto que pasamos de los pequeños agricultores y pirquineros de hace algunas décadas, a la agroindustria y la mega minería de la actualidad³.

El proceso que acompaña este desarrollo ha sido caracterizado por Harvey (2004) como de acumulación por desposesión, dinámica de territorialización a partir de la que se manifiestan los desarrollos desiguales, que se caracterizan por la dispar distribución espacial entre la explotación, la contaminación y la acumulación del capital⁴ (Harvey, 2007; Smith, 1991; O'Connor, 2003).

1 Sociólogo. Profesional Servicio País ciclo 2009-2010 en la comuna de Vallenar, Región de Atacama. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Programa Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) - Universidad de Santiago

2 Geógrafo. Profesional Servicio País ciclo 2009-2010 en las comunas de Huasco y Vallenar, Región de Atacama. Actualmente se desempeña como Profesional en el Programa Quiero mi Barrio, en la Comuna de la Granja, Región Metropolitana.

3 La gran minería ingresa de forma intensiva recién a partir de los años 60, gracias a la presencia de importantes yacimientos de fierro y al micro auge industrial chileno (vinculado a la generación de acero por parte de la CAP), para luego pasar al holding CMP durante la dictadura chilena. Ya hacia los años 90, se inserta Eléctrica Guacolda, ayudada por la especulativa generación de energía barata, en un supuesto escenario de sequías y crisis energéticas. Ya hacia el año 2000 llega la mega minería de la mano de Barrick Gold, y la Agroindustria en el valle, con el caso de Agrosuper. Todo esto sin contar el impacto local de la agrícola Campillay.

4 Para el caso de la gran minería de oro el ejemplo es evidente, mientras Barrick cuenta con su centro de operaciones en Toronto, Canadá, su centro de faenas se ubica a miles de kilómetros de distancia, en el Valle del Huasco, Chile.

En línea con esta construcción de un territorio en tensión y constante cambio⁵, se llevan a cabo, en paralelo, una serie de políticas públicas que legitiman las invasivas formas de percibir el desarrollo en la región.

De este modo, se irrumpe en un valle que es el último oasis que detiene el desierto de Atacama y que acoge, en gran medida, algunos imaginarios de lo rural: “campesinos, mineros, pescadores, artesanos, empresarios agrícolas y los dedicados al sector servicios como pobladores rurales” (PNUD, 2008. p, 19), con distintas actividades que van de cordillera a mar -minería, agricultura, termoeléctricas y pesca- que puján y compiten por recursos limitados.

Formas invasivas de desarrollo encuentran, en otro imaginario de lo rural, un espacio “atrasado” y “primitivo”, un espacio de transformación especulativa, donde las tierras vírgenes deben ser puestas en producción (Woods, 2011).

El río Huasco, que atraviesa el valle por todas sus comunas, debe sustentar una serie de actividades que se contraponen y devienen en incompatibles, situación frente a la que el corolario parece ser claro: en el valle no hay espacio para todos.

En esta línea, el valle cuenta con comunidades locales que buscan espacios donde subsistir en este escenario hostil, como también sobrevivir a ambientes contaminados y a políticas públicas que replican este modelo (de extracción de materias primas), lo que amenaza con mucha claridad el ethos productivo de diferentes comunidades y que, por lo demás, perpetúa una situación que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.⁶

5 “Tras siglos de una relativa estabilidad empírica y simbólica de las realidades agrarias, no solo se han producido enormes transformaciones, sino que la idea misma de cambio se ha instalado también en el centro de los territorios sociales de la ruralidad. Esto ha acarreado una enorme convulsión en la relación de los habitantes y trabajadores rurales con sus territorios, en sus pertenencias y extrañezas” (PNUD, 2008. P, 53).

6 Principalmente el derecho a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación (Instituto Nacional de

El Valle del Huasco se constituye, a partir de una serie de políticas estructurales que lo han modelado, en un territorio de sacrificio, en el que todos los problemas (las “externalidades negativas”, hablando en la jerga dominante) de una forma de concebir el desarrollo no han sido cuestionadas, ni han enfrentado barreras institucionales, sino que más bien han contado con un fomento, o al menos una venia institucional, a pesar del evidente descalabro social y ambiental.

Todos estos procesos, que se han llevado a cabo bajo la retórica de la descentralización, se han traducido, en realidad, en una desconcentración de los poderes del Estado, en los que se delega manteniendo el centralismo en las decisiones importantes. Se abre acá un espacio considerable de crítica a la forma como el Estado chileno ha conducido el proceso descentralizador, por lo menos desde un punto de vista territorial, al no acompañarlo mediante un proceso paralelo de creación y de transferencia del conocimiento pertinente a la epistemología del crecimiento económico y del desarrollo territorial⁷

Un proceso descentralizador, desde esta perspectiva, implicaría contar con políticas de desarrollo (endógeno) más proteccionistas hacia las regiones; en una visión opuesta al simple y fiel desarrollo de ventajas comparativas, donde el Valle del Huasco parece condenado a la eterna explotación de materias primas.

Las comunidades, Servicio País y las políticas de Estado

En el contexto descrito, el Programa Servicio País participa de distintas actividades, destacando, entre ellas, la intervención en el borde costero, el trabajo con agricultores y, por último, con la Comunidad Huascoalina. Intervenciones que a continuación se describen brevemente.

Derechos Humanos, 2012)

7 Para profundizar el tema de la descentralización de Estado referirse a Boisier, S., 1998, Boisier, S., 2007

Tomando la intervención del borde costero de la provincia del Huasco, podemos mencionar que, en lo práctico, la intervención se centró en actividades que buscaban convertir actividades mono productivas, como la pesca artesanal, en actividades pluri productivas, donde se incluía el turismo y la gastronomía, buscando una reconversión productiva. La dinámica de trabajo que se replicaba era la “mesa de pesca”, comisión entre públicos y privados, donde los grupos de poder buscaban validarse frente a los pescadores artesanales, generando lógicas de dependencia hacia las autoridades, bajo una óptica metodológica de mutuo apoyo y democracia.

El trabajo con los agricultores, por otra parte, consistía en el fortalecimiento comunitario a partir de la asesoría a organizaciones comunitarias y, así también, en la participación frente a las instancias en dónde podían tener participación (observaciones frente a proyectos ambientales, mesas del agua o comisiones de empleo).

Por último, el trabajo con el pueblo Huascoalino se alejaba de estas dinámicas pro gobernabilidad, puesto que estas comunidades buscaban consolidar un territorio de auto determinación, y en este objetivo, incluso se hacía necesario demandar al Estado de Chile⁸; sin embargo, paralelamente, trabajaban con fondos gubernamentales y de ONG’s ambientalistas.

Como rasgo común de las intervenciones descritas, es importante destacar la sintonía y el entusiasmo de las comunidades locales con estas iniciativas. En efecto, el sector de la pesca artesanal es sumamente vulnerable, debido tanto a los peligros que los pescadores asumen las noches que salen a pescar, como a la precariedad que enfrenta el sector ante el desarrollo de la pesca industrial. Y lo mismo ocurre con los agricultores, por la inseguridad de contar o no con agua o un ambiente libre de contaminación, ambos factores

cruciales para su trabajo.

En este punto es donde consideramos que las políticas macro y sus indicadores asociados pueden chocar en ocasiones con el trabajo que realizan algunas organizaciones sociales con las comunidades. Estas situaciones, que parecen paradojas –la mano izquierda y derecha del Estado enfrentadas⁹–, devienen en una relación de interdependencia y complicidad. Un buen ejemplo, en relación a la agricultura, corresponde a las medidas de mitigación que establece la autoridad para los proyectos de la gran minería en la cordillera o las termoeléctricas en la costa. La primera, compitiendo por el uso productivo del agua y la segunda, amenazando los cultivos debido a la polución. Otro ejemplo desde la experiencia con la pesca artesanal, es la invitación del Estado a participar de mesas de pesca, donde a pesar de promover asambleas abiertas de opinión y el fomento productivo, todo se condiciona a legislaciones que no vinculan realmente la participación¹⁰, ni mucho menos cuestionan asuntos estructurales de la pesca artesanal (precariedad laboral, una ley de pesca pro sector industrial). Por otra parte, los sectores privados invitados a participar en estas instancias desde una lógica de Responsabilidad Social Empresarial¹¹, constituyen en el mediano y largo plazo una amenaza a la posibilidad de existir de

9 Aludimos a metáfora que Bourdieu establece en relación a los “brazos del Estado”, que bien pueden implementar acciones contrapuestas. El brazo derecho al pretender dinamizar la macro economía frente al brazo izquierdo que, al caso, corresponde a todas las intervenciones de pobreza en que se insertan los profesionales de servicio país: “contradicciones que rayan el límite más extremo de los que experimentan actualmente todos los denominados “trabajadores sociales” (...). Constituyen lo que llamo la mano izquierda del Estado, el conjunto de agentes de los ministerios llamados dispendiosos, que son la huella, en el seno del Estado, de las luchas sociales del pasado. Se enfrentan al Estado de la mano derecha, a los enarcas del ministerio de Hacienda, los bancos públicos o privados y los gabinetes ministeriales” (1999.p. 12).

10 Este es el caso de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, que condiciona la participación desde la consulta no vinculante, que solo permite “mejorar” los proyectos de inversión, nunca poniendo en duda la realización de estos proyectos.

11 Este es el caso de la empresa Eléctrica Guacolda, la agroindustrial Agrosuper y la minera Barrick Gold.

8 Este es el caso de la denuncia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidenciaba la nula injerencia de la comunidad Huascoalina frente a la aprobación del proyecto Pascua Lama, dentro de su propio territorio soberano.

otros sectores. De ahí que ofrezcan recursos para la reconversión productiva (principalmente el turismo y capacitaciones para operar maquinaria pesada). De este modo, en esta clase de instancias se toman una serie de iniciativas y medidas que no guardan coherencia entre ellas y que en la práctica mantienen el status quo.

La paradoja no solo se vivía en relación a los fines y propósitos de las políticas descritas, sino también a partir de cómo se implementaban estos proyectos sociales, en que las diferentes instituciones se disputaban a los usuarios/beneficiarios, tal era el caso –siguiendo con la agricultura– de al menos cinco instituciones¹² que trabajaban en el mismo territorio y con el mismo perfil de usuarios. Y, por otra parte, desde las comunidades, al hacerse beneficiarias de estos proyectos bajo una lógica oportunista¹³.

Frente a este contexto general, surgen las siguientes preguntas: ¿qué clase de intervención es factible realizarse en comunidades que marchan al inexorable desastre socio ambiental? ¿Qué puede hacer una comunidad en relación a sus derechos de agua, frente a las presiones de la gran minería? ¿Qué puede hacer la pesca artesanal cuando se cambia el uso de suelos en la costa y se instala una termoeléctrica? ¿Y qué pueden hacer los olivicultores frente a la polución producto de la producción de energía contaminante?

Se trata de preguntas abiertas en territorios en que el crecimiento y el desarrollo se padecen por sectores como los descritos, a partir de los costos sociales y medioambientales. Si bien estos sectores pueden ser eventualmente incluidos desde lo económico a partir de trabajos temporales o en el área de servicios, son excluidos

desde lo social. Basta pensar en la clase de empleo al que se puede acceder en la agroindustria o en la minería, mediante relaciones formales y legales, pero fuertemente precarizados.

Como dos caras de una misma moneda, estas comunidades son el reverso de las cifras macroeconómicas y el crecimiento. En palabras de Bengoa, “no tienen manera de ‘colgarse’ del desarrollo que se está llevando a cabo en el país. Lo ven por la televisión. No hay lazos con el ámbito desarrollado. Pero junto a no ver maneras de ‘colgarse’ del desarrollo, tampoco se tienen las herramientas adecuadas para posibilitar un camino paralelo, definir las ‘vocaciones’ del sector, manejar localmente los hitos del propio desarrollo, establecer programas institucionales que permitan un desarrollo específico, e incluso alternativo, de esa área del país” (1996. p.3).

En definitiva, tal como señala Solimano, la pregunta que enfrentan cotidianamente estas comunidades es: “cómo cuadrar esta construcción hipotética de una aséptica y armoniosa economía de mercado con la evidencia diaria y tangible del capitalismo real” (2012: 68). Lo que al caso corresponde, casi de modo independiente, a que las cosas vayan bien o mal, a una situación muy precarizada y de gran incertidumbre.

Se busca, por ende, superar la pobreza, pero desde una óptica sesgada, orientada especialmente a la empleabilidad y al fomento productivo, sin considerar una resistencia a este territorio de sacrificio construido históricamente en conjunto desde el Estado, la élite empresarial y las comunidades locales, históricamente domesticadas (Zibechi, 2010) e impotentes frente a la dimensión de los cambios por las políticas públicas de turno.

Servicio País y sus roles.

En esta clase de contextos, el Programa Servicio País envía a sus profesionales a participar en distintas instituciones y programas gubernamentales. Aquí se produce un primer desajuste, en la medida en

12 Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), Prodesal (Programa de Desarrollo Local), PTI (Programa Territorial Integrado) Cadenas Agroindustriales, Codesser (Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, Ceaza (Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas), etc.

13 En estos casos, había situación tales como matrimonios en que la mujer aparecía beneficiaria de una institución y el hombre de otra, pese a que de acuerdo a las bases, los beneficios eran excluyentes.

que como Fundación y como representantes de una institución de acogida, existe una relación de doble dependencia, en que las directrices de uno y otro pueden coincidir o inclusive estar contrapuestas.

La primera pregunta, entonces, es: ¿cómo se insertan los y las profesionales de Servicio País en las instituciones de acogida? Esto, en la medida que muchas de ellas, también ejercen roles que pueden no compartir necesariamente la visión de pobreza de la Fundación¹⁴.

El profesional SP se enfrenta a esta realidad, como traductor de las demandas de las comunidades –en una labor de intermediación, mediante la formulación de proyectos, por ejemplo- y como la cara amable del Estado y los programas sociales, la de los y las jóvenes del “Chile País”.

El profesional hace con frecuencia de vínculo entre diferentes actores, comunidades e instituciones gubernamentales, lo que implica ejercer un rol bastante específico, en la medida en que trabaja por un lado con la comunidad, al ofrecerles asesorías profesionales que les permiten acceder a la oferta pública de recursos; y trabaja, por otra parte, con el Gobierno, al facilitar su vínculo con las comunidades, ayudando a naturalizar relaciones de dependencia hacia los organismos estatales y las empresas.

Raúl Zibechi (2010, p. 70-71) grafica con claridad las dinámicas que se dan entre el Estado y las comunidades locales, donde los y las profesionales de Servicio País son interlocutores:

“Se genera la ilusión de que los problemas concretos del barrio, o de la sociedad, pueden resolverse con base en la colaboración de “actores”, que resuelven sus diferencias sin lucha ni confrontación. En este punto hay total confluencia entre empresas privadas o públicas y el Estado: ambos buscan involucrar a los colectivos

territoriales en una cultura de colaboración, para llevar adelante acciones positivas concretas que consisten en intervenciones de carácter no estructural que refuerzan la subordinación de los pobres”.

De esta forma, el Estado controla a las comunidades que puedan resultar disruptivas, generalmente aquellas que se encuentran más afectadas por los problemas generados por la visión de desarrollo extractivista, por ejemplo, los pescadores artesanales. Zibechi (2010) y Atria (2013) coinciden en que la institucionalidad por medio del consenso apacigua el descontento, y también la posibilidad de cambio al sistema imperante: “Las instituciones políticas son las formas en que lo polémico del conflicto político es contenido para permitir la discusión y el conflicto político sin que se desate la violencia” (Atria, 2013, p. 22).

La base del funcionamiento de estas instituciones se centra en el paradigma productivo del desarrollo capitalista, que requiere (para la acumulación particular, y por ende, el despojo popular), además del control de la sociedad, mantener, por un lado, la desigualdad a niveles que no sean tan escandalosos, mediante la superación de la pobreza (Zibechi, 2010), y la puesta en operación del capital mediante el trabajo (Harvey, 2012).

El profesional de Servicio País vive parte de la paradoja de “cuadrar el círculo” de la acción de la mano derecha con la mano izquierda del Estado, y cómo se compatibilizan la vida de las comunidades con los efectos no deseados de la modernización.

Paradojas que se ven acentuadas en la medida en que el trabajo en las comunidades se evalúa a partir de una visión tecnocrática, basada en la construcción de indicadores, que pretenden estar asociados a su eficiencia. Al caso, el punto no es carecer de una evaluación, sino la falta de una adecuada planificación y coordinación intersectorial que pueda redundar en una intervención realmente pertinente al territorio.

¹⁴ En las experiencias de los autores, se contraponen las visiones de la pesca artesanal y agricultores, con la comunidad indígena Huascoalina, que tenía una idea más autónoma y reivindicativa de desarrollo.

En este sentido, se percibía una oferta pública diseminada, pero que en la práctica ofrece lo mismo¹⁵.

Así, también resultaba claro para nosotros que había muchos procesos que sencillamente no era posible “cuantificar”; en este sentido, tal como señala el PNUD, las “políticas públicas no pueden medirse exclusivamente por la eficacia de sus rendimientos objetivos; deben ser también espacios de reconocimiento, valoración y potenciación de las personas” (2008: 110).

Así también, el trabajo directo con las comunidades permite una visión bastante menos idealizada. En esa línea, más de una vez, nos enfrentamos a líderes comunitarios que buscaban ayuda para formular un proyecto. Y que ante la pregunta sobre “¿cuál?”, la respuesta era “cualquiera, usted sabe que salieron los fondos de...”¹⁶.

En este sentido, insertos en las instituciones de acogida descritas, relacionándonos con estas comunidades y en el marco de las intervenciones que propone la Fundación para la Superación de la Pobreza, se debía tomar partido y enfrentar las tensiones, entre los requerimientos de las instituciones de acogida, de las comunidades y los objetivos originalmente trazados a partir de los que había que reportar resultados y avances a la Fundación.

15 Bengoa ofrece un ejemplo al respecto: “se percibe la existencia de cuantiosos recursos que se emplean de forma paralela descoordinada, repetitiva y sin efectos reales concretos. Los campesinos nos dicen siempre, ayer pasó la camioneta de otra institución, cada camioneta lleva sus programas, sus técnicas y sus propuestas. Muchas veces no saben lo que los otros hacen y se contradicen. Hablábamos en algunas reuniones de manera burlona, del programa de la “camioneta única” como perspectiva de coordinación” (1996, p.11)

16 Dirven ofrece un muy buen ejemplo: “En el ideario latinoamericano, la población campesina y más aún la indígena, son consideradas como los grupos donde el capital social se da por excelencia. Sin embargo, los que trabajan directamente con ellos tienen una visión menos idealizada, en donde el individualismo, los conflictos, las relaciones de poder y de clientelismo prevalecen o son suficientemente frecuentes para no ignorarlas” (2003:409)

Reflexiones finales

Saber cómo se operacionalizan las intervenciones en pobreza, más allá de lo que se plantea institucionalmente o el bagaje profesional de cada cual, fue un gran aprendizaje que permitió entender cómo dialogan territorio, políticas públicas y comunidad en sus distintos niveles, en lo que hemos denominado, genéricamente, como “cuadrar el círculo”.

En este sentido, el texto ha buscado problematizar la pertinencia del Programa Servicio País y cómo éste está imbricado con la cultura local y los anhelos de la comunidad. El análisis lo hemos hecho tratando de alejarnos de una visión voluntarista así como de los supuestos en el diseño de política que pretenden que éstas se implementan en una tabula rasa.

En lo que respecta a la experiencia con la pesca artesanal, los proyectos de fomento productivo constituían ayudas poco significativas, que buscaban la reconversión del ethos pesquero. Se buscaba hacer útil un sector identificado como atrasado y poco dinámico, sin fomentar ni proteger desde las virtudes del sector. Ante esto, ¿estamos realmente buscando superar la pobreza, o estamos replicando un modelo de intervención estandarizado para los usuarios o clientes de estos programas?¹⁷ Similar situación se vivía en relación a la agricultura.

Al parecer, las políticas públicas que buscan superar la pobreza se diseñan desde una óptica sesgada, orientada especialmente a la empleabilidad y al fomento productivo, pero sin considerar una resistencia a este territorio de sacrificio,

17 Es importante dejar la pregunta abierta tanto al profesional Servicio País como a la misma Fundación, pues el enfoque promocional que persigue ésta, metodológicamente suele caer en el simple fomento productivo (visión más hegemónica de tratar y reproducir la pobreza), pero a la vez, Servicio País facilita niveles de libertad que imprimen las directrices de las instituciones de acogida (no es lo mismo trabajar en Chile Emprende, PTI Corfo, o con el pueblo Huascoalitino), que permiten una mirada interna mucho más rica y local (visión contra hegemónica para situar pobreza y riqueza).



construido históricamente en conjunto desde el Estado, la élite empresarial y las comunidades locales históricamente domesticadas, (Zibechi, 2010) e impotentes frente a la dimensión de los cambios por las políticas públicas de turno.

ser una expresión refractaria de otras que se constituyen en las hegemónicas, tales como la gran minería, la agroindustria o las termoeléctricas.

A principios de 2012, la ciudadanía de Freirina, mediante presiones mediáticas, cortes de caminos y manifestaciones, se levantó en contra del histórico y naturalizado desarrollo, materializado por la planta de alimentos y faenadora de cerdos de Agrosuper. Las presiones terminaron dando la razón a las comunidades locales. Situación que se encuentra en desarrollo, junto a la judicialización de los proyectos Pascua Lama y El Morro, lo que supone un despertar de las comunidades locales, que para el 2009 parecían somnolientas ante el asistencialismo Estatal y la intromisión empresarial. El trabajo, entonces, para la búsqueda real de la superación de la pobreza, ¿no debería estar directamente en relación con las comunidades locales?

¿Las intervenciones en pobreza deberían considerar el inevitable antagonismo de lo político (Mouffe, 2007), inevitablemente presente en las políticas públicas? Es decir, no considerar a las políticas públicas como asépticas, técnicas (y libres de ideología), sino como metodologías que integran los conflictos que se dan entre distintos actores sociales presentes en el territorio. Ante esto, asumiendo los antagonismos y según nuestra experiencia en Servicio País, consideramos que en el caso de nuestra intervención hubiera resultado más pertinente ofrecer a las comunidades locales herramientas de incidencia mediática y jurídica (cortes de ruta, marchas, judicialización de proyectos de inversión, etc.) Pues estas vías han resultado las únicas que se han mostrado como alternativas al statu quo, al territorio de sacrificio. ¿Se debe entonces, avanzar a territorios de resistencia?

Por último, la política pública ha tomado estas formas en el Valle del Huasco, quizá en la medida en que no hay otra alternativa viable al modelo de desarrollo, y se considera que el estilo de vida adoptado por estas comunidades –las de pescadores y agricultores, por ejemplo–, debe